

Trama Política

Boletín número 4 del mes de agosto del 2010.

Año 4, número 158

Contenido.

- Contenido..... 2**
- Seguridad Pública, delincuencia organizada y mafias. 3**
- Diálogo por la seguridad. 2ª. Parte..... 3**
- Preámbulo..... 3**
 - Dice Francisco Rojas, coordinador del PRI en la Cámara Baja. (11/08/2010) 4
 - Estamos en una guerra dice Joaquín Villalobos. (11/08/2010) 4
- Los objetivos buscados en el “Diálogo por la Seguridad” no parecen suficientemente claros para la opinión pública..... 5**
 - El Presidente Calderón dice que no ha afirmado que vamos ganando. (14/08/2010)..... 6
 - Dice el experto John Mill Ackerman. (15/08/2010)..... 7
 - Dice Ernesto López Portillo. (15/08/2010) 8
- Algunas cifras de la violencia..... 9**
 - El Presidente dijo en una reunión con la bancada panista. (17/08/2010) 10
 - Cinco ejes de la estrategia del Presidente Calderón. (17/08/2010) 10
 - El secuestro es un azote crudelísimo para la sociedad. (17/08/2010) 11
 - El PRI se asocia con el PRD para desdeñar la convocatoria presidencial. (20/08/2010)..... 11
- Las secuelas de la creciente violencia que padecemos son muchas y complejas..... 12**
 - El Acuerdo Nacional por la Seguridad no ha funcionado. (22/08/2010)..... 13
 - El narcotráfico podría escalar sus ataques a la clase política. (23/08/2010)..... 13
 - Los bajos salarios de las policías son un flanco débil ante el acecho de la corrupción. (23/08/2010) 14
- Al parecer, el país ya no puede contar con el PRI, cuyos líderes están obsesionados en volver a la Presidencia. 14**
- Claves del documento 16**
- Fe de erratas. 16**
- Notas al final del documento 16**

Seguridad Pública, delincuencia organizada y mafias.

Diálogo por la seguridad. 2ª. Parte.

Preámbulo.

El partido por antonomasia de la “familia revolucionaria”, el PRI, continuamente alega su rotunda negativa a asumir su responsabilidad en los problemas creados por el narcotráfico y la delincuencia organizada, mafias que fueron apoderándose de algunos territorios en el país para garantizar las rutas de los estupefacientes hacia Estados Unidos, fenómeno que ocurrió durante decenas de años. De tal manera que resulta imposible aceptar, ---como en ocasiones pareciera plantearse no sólo por el PRI sino por algunos otros grupos con intereses políticos--- la versión que adjudica esa responsabilidad a los dos gobiernos panistas que han estado en la presidencia en los últimos diez años, independientemente de que sin duda se pueden esgrimir con razón algunas fallas importantes, en sus respectivas gestiones, para abordar este problema del control de las bandas del crimen organizado.

*Habría que preguntarse si los cárteles “calientan” las plazas y territorios controlados por sus competidores, para asociarse con el gobierno en su persecución, ---hipótesis que ha sido materia de denuncia en algunos Medios, nacionales e internacionales, como ocurrió con la Radio Pública Nacional en Washington¹ cuando el Presidente **Calderón** visitó los Estados Unidos, que han llegado a sostener la existencia de una presunta negociación del gobierno con el sindicato de cárteles liderado por el **Chapo Guzmán**--- o si hay razones inconfesables de mayor calado.*

Pudiera ser que algunos padrinos de alto nivel político, cómplices y usufructuarios del narcotráfico, impulsen la violencia para afectar no sólo a las bandas rivales sino también a los Medios de comunicación, a miembros de los sectores políticos y a destacados líderes de la sociedad, con el objetivo de incrementar la percepción en la opinión pública de una creciente ingobernabilidad, cuya solución implícita ---pareciera insinuarse--- sería la vuelta al gobierno de los que supuestamente saben controlar la violencia, es decir de los muy experimentados políticos de la “familia revolucionaria”.

Lo paradójico es que todos los que hemos vivido más de cincuenta años sabemos que fueron precisamente los gobiernos de la “familia revolucionaria” los que permitieron y prohijaron el crecimiento del problema de la delincuencia organizada en medio de una corrupción enorme, heredándolo a los gobiernos panistas de la alternancia que ciertamente no lo han

podido resolver bien, sobre todo cuando han pretendido hacerlo mediante la colaboración de connotados funcionarios que vienen del antiguo régimen y que en su tiempo estuvieron a cargo, supuestamente, de su solución.

Dice Francisco Rojas, coordinador del PRI en la Cámara Baja. (11/08/2010)

Ahora, se reconoce que la estrategia para combatir al crimen organizado ha fallado; después de 28 mil muertos y regiones enteras del país asoladas por la violencia, se convoca a la sociedad para que aporte ideas y se haga corresponsable de una decisión que se tomó a solas y, como hoy se acepta, sin información ni preparación adecuada. A mayor abundamiento, se hizo sin evaluar la capacidad, el equipamiento ni la idoneidad de las fuerzas federales, estatales y municipales, quizá por haberse desmantelado durante el sexenio pasado el aparato de inteligencia nacional.

La violencia en el país ha alcanzado niveles sin precedentes en tiempos de paz y, como lo señala la ONU, profundiza la desigualdad, porque los pobres y clases medias no pueden mudarse a zonas seguras ni pagar servicios de protección privada, pierden acceso a los servicios médicos y educativos y la inseguridad dificulta distribuir los recursos de programas sociales.²

Estamos en una guerra dice Joaquín Villalobos. (11/08/2010)

Una parte importante de la sociedad mexicana se resiste a aceptar la idea de que México está en guerra y, mientras no acepte esa realidad, nunca podrá entender la violencia que está viviendo el país.

En México, el centro del conflicto es su valor de ruta para introducir drogas a Estados Unidos. Los miles de millones de dólares que produce esa ruta generaron unos poderes fácticos criminales con ejércitos privados que se hicieron dueños de la frontera norte de México y parte de la frontera sur de Estados Unidos.

Es cierto que México tiene problemas de impunidad, corrupción y debilidad institucional, pero esos problemas no tenían por qué derivar en una guerra. Han sido el valor como ruta de la droga, los miles de millones de dólares y las decenas de miles de armas provenientes de Estados Unidos los factores principales en la generación del conflicto. Dada la diferencia de desarrollo entre ambos países el comercio ilegal de drogas ha impactado de forma asimétrica. Lo que para Estados Unidos es un problema marginal de salud y seguridad pública, para México se ha convertido en guerra y amenaza a la seguridad nacional.

No se trata de escoger entre perseguir narcotraficantes o perseguir “rateros”, sino de atender una clara amenaza a la soberanía del Estado que pone en peligro a toda la sociedad. Es comprensible que por razones de imagen, rigidez teórica o interés político personal, no se le quiera llamar guerra a una guerra, pero los datos duros son muy claros en ese sentido, el país tiene una guerra y la violencia es parte natural de ésta.

No existen las guerras sin muertos, por lo tanto, mientras no se acepte que hay un conflicto armado y que se está frente a una situación anormal que demanda sacrificios y acciones extraordinarias, no se entenderá la violencia, se pensará que ésta se puede ocultar o resolver rápido y fácil, o se creará ingenuamente que si el gobierno suspendiera sus operaciones la violencia terminaría.

Con el crimen organizado no se puede ni convivir ni negociar y si no se le combate crece. Si no se les estuviera combatiendo ahora, a futuro terminarían convertidos en un gran poder criminal en el propio Distrito Federal, tal como le ocurrió a Colombia con Bogotá. Si el centro de gravedad del conflicto es el valor de la ruta de la droga, es necesario

reducir al máximo el valor de ésta, quitándoles ventajas, oportunidades y comodidades a los cárteles en el uso de ese territorio.

Estos grupos no crecieron, se armaron y se apoderaron de territorios de la noche a la mañana; lo hicieron durante un periodo de paz ficticia que al final se volvió insostenible. No fue la acción presente del Estado lo que generó la violencia, sino la inacción de éste en el pasado.

Las victorias por ahora no pueden medirse por el fin o la disminución de la violencia, sino por los golpes que las fuerzas del Estado propinan a los cárteles; por las armas, el dinero y la droga decomisada; por las capturas de delincuentes; por la reducción de la infiltración en las policías; por los territorios que se van recuperando; por la reforma, depuración y unificación de las policías; por el desarrollo de políticas sociales orientadas a mejorar la seguridad y por la construcción de infraestructuras que permitan consolidar los territorios recuperados; éstos son los indicadores del éxito.

Que ahora haya más violencia y que los cárteles exhiban su poder no es señal de que vayan

ganando, sino de que se están viendo obligados a manifestarse e intentan que el Estado deje de perseguirlos. Están usando su recurso de excepción y dejando de aplicar su regla de no calentar plaza.

Por otro lado, el asesinato de **Rodolfo Torre Cantú** es para los cárteles un punto de quiebre a su posibilidad de contar con la indiferencia de la clase política: han retado a todo el sistema y, con ello, por intentar enfriar Tamaulipas, han calentado a todo México.

La guerra en México está entrando en una fase más definitiva, la violencia cuantitativa podría ir disminuyendo, pero aparecerá una violencia de mayor impacto y el combate entre los cárteles y el Estado se volverá más frecuente e intenso. En Colombia la fase más violenta de la lucha contra los cárteles urbanos fueron los últimos años. Es indispensable entender que desmontar estructuras criminales que se apoderaron de policías no es tarea fácil; dismantelar grupos armados muy violentos con arraigo social y grandes intereses en el comercio de droga no es tarea pacífica.³

Los objetivos buscados en el “Diálogo por la Seguridad” no parecen suficientemente claros para la opinión pública.

La posición del Presidente y de los miembros de su gabinete al dar sus opiniones en el Diálogo pareció adoptada más para ratificar las decisiones tomadas con anterioridad, --- en cuyo caso el ejercicio de este foro no tenía mucha lógica---, que para discutir abiertamente el tema con razones y argumentos que pudieran ser confrontados con los alegados por otros, o para rendir cuentas de los resultados obtenidos como consecuencia de los compromisos asumidos con anterioridad en el Acuerdo Nacional por la Seguridad.

En algunos de los foros de este Diálogo, pareció que el Presidente pretendió no sólo lograr la cooperación y la corresponsabilidad de toda la sociedad y de cada uno de los sectores convocados para la solución del problema, sino mucho más ---porque los Medios transmitieron a la opinión pública esa impresión---, porque deseaba trasladarles buena parte del peso de la solución adoptada, como si buscara repartir su responsabilidad o justificarse de los presuntos malos resultados obtenidos por medio del combate frontal que ha instrumentado.

A nuestro juicio, esa versión puede no resultar muy justa porque el Presidente **Calderón** de manera explícita, asumió reiteradamente su responsabilidad y confirmó su decisión personal de no dejar de combatir a las mafias hasta el último día de su administración.

Quizás, cuando menos parte de la confusión se dio porque los Medios destacaron opiniones que efectivamente fueron vertidas por el Presidente, como las siguientes:

> “No hemos sabido explicar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo...; no tenemos tampoco el control de la información estatal”.

>... cuando la gente es víctima de extorsión, secuestro o asesinato, “créanme que no hay mucho tiempo para la reflexión y el análisis” ---aun cuando, en su primera intervención, explicó que esa lucha no puede ser producto “ni de la improvisación ni del azar”---

> Dijo el Presidente “Yo creo que necesitamos una sociedad organizada... que nos proporcione la información. Es una información que tratamos de organizar por canales institucionales, pero esos canales están deteriorados”. Y admitió que la simple acción de denunciar “genera una condición de vulnerabilidad enorme” para los presuntos denunciantes.

> “Tenemos una delincuencia organizada y una sociedad desorganizada. Una sociedad... de la que requerimos información puntual, si se quiere incluso confidencial, secreta, de lo que están haciendo los criminales”.

Ésas y otras expresiones semejantes del Presidente **Calderón** ---cuyo propósito no parece muy claro y que además fácilmente pueden ser sacadas de contexto---, generaron no poco desconcierto porque difuminaron o incluso enmascararon los objetivos que posiblemente se buscaban en el Diálogo ---mismos que tampoco han sido suficientemente explícitos ni, una vez más, adecuadamente explicados y comunicados--- por lo cual cada grupo, en cada sesión, pudo introducir su propia interpretación acerca de los fines buscados en esos foros y muchos también se limitaron a apoyar, en sus intervenciones, sus particulares intereses.

Por lo anterior, a pesar de la indiscutible habilidad dialéctica del Presidente, su desgaste pareció considerable. Resultado al que contribuyó su permanente voluntad de asumir personalmente todo el protagonismo del acto, centralizando la expresión de todas las opiniones y posicionamientos del gobierno ante la pobre actuación de los principales miembros de su gabinete, quizás porque no les permitieron asumir su propia responsabilidad.

El Presidente Calderón dice que no ha afirmado que vamos ganando. (14/08/2010)

El martes pasado (10 de agosto), ante líderes partidistas que participaron en el Diálogo por la Seguridad, el presidente **Felipe Calderón** admitió que la percepción generalizada es que la guerra se va perdiendo. “No comparto esa afirmación”.

Al referirse a lo informado por algunos Medios en el sentido de que la guerra contra el *narco* se va ganando, el Presidente en su cuenta de Twitter aclaró: “Jamás dije que ‘vamos ganando la guerra contra el *narco*’. Es lamentable que en algún Medio me atribuyan palabras que nunca he pronunciado”.

En la ceremonia en la que 42 generales y capitanes, así como seis civiles —funcionarios de dependencias de gobierno— recibieron su grado académico en la maestría en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional, el General **García Vergara** puntualizó: “Que quede claro, esta guerra también se está ganando, porque estamos unidos, porque nos asiste la ley y la razón; aunque más que nada, porque nadie tiene derecho a rendirse, nadie tiene opción para desviar el rumbo y mucho menos a perder la fe en México y en su Presidente”.

Indicó que “ahora nuestro país marcha con dirección y rumbo, no importa que tan grandes sean los retos, sabremos salir adelante con dignidad, porque tenemos fe y confianza en el futuro, porque bajo la atinada dirección del Presidente, comandante supremo de las fuerzas armadas, habremos de contribuir responsablemente en la recuperación y consolidación del país”.

(El Secretario de la Defensa Nacional) **Guillermo Galván** encabezó el presidium en el que estuvieron también los secretarios de Marina, **Francisco Saynez**; de Gobernación, **José Francisco Blake**, y de Seguridad Pública federal, **Genaro García Luna**.⁴

Dice el experto John Mill Ackerman.
(15/08/2010)

El experto en derecho constitucional y de rendición de cuentas, **John Mill Ackerman**, asegura que las grandes debilidades del Presidente —un gabinete gris que no tiene capacidad ni valentía para enfrentar los problemas y la cooptación de su gobierno por intereses fácticos, ---entre otros problemas--- le impiden dar una lucha al crimen organizado, y al narcotráfico que ha permeado en la sociedad y el Estado mexicano.

Sin embargo, hasta ahora no veo más que lo que ya tuvimos hace dos años con el gran Acuerdo Nacional por la Seguridad...

Esa es la debilidad principal. Escoge leales, burócratas grises, que no saben dar un empuje a este gobierno. Uno entiende: quizás **Calderón** se siente inseguro, no quiere a nadie que lo opaque. Una persona segura y fuerte no tendría miedo de que hubiera otras figuras que lo pudieran apoyar en este tema.

Si quieres combatir en ese terreno al narcotráfico tienes que combatir los paraísos fiscales, pero eso implica encontrarte con mucha información con respecto a la clase empresarial del país. Estas grandes familias y empresas que también tienen sus cuentas en los paraísos fiscales y quién sabe, tal vez hasta inmiscuidos con las cuentas de los empresarios de no tan buena reputación que podrían estar con el narcotráfico.

La sociedad reclama investigaciones serias respecto a la complicidad de actores sociales y gubernamentales con el narcotráfico y la corrupción, es la fuente de esta crisis del narcotráfico y también el asunto, diría yo, del virus de la influenza del año pasado. La crisis económica, la corrupción, y aquí no tenemos ninguna voluntad clara de parte de **Calderón**, no hay siquiera una guerra contra la corrupción.

Ya está muy trillado y desgastado el tema de los organismos autónomos, pero existen propuestas a la mesa del mismo Instituto de Jurídicas, también de partidos políticos; por ejemplo: dotar de una autonomía mucho más real y facultades más desarrolladas a la Auditoría Superior de la Federación, darle autonomía a la PGR.

Con una simple autonomía no basta. Ya hemos visto lo que pasa con el IFE o por ejemplo con la CNDH, que con una autonomía legal parece ser una invitación para que haya una mayor captura como organismos autónomos, se hace más vulnerable esa institución un botín más jugoso para los políticos. Entonces, por mucha autonomía que tengan terminan siendo capturados por intereses específicos.⁵

Dice Ernesto López Portillo. (15/08/2010)

“Tenemos desde hace mucho tiempo acumulándose los resultados de la crisis. Hace ya casi veinte años tenemos disponible un dato contundente que no ha variado y es el hecho de que más del 90 por ciento de los delitos denunciados no son condenados; es decir, nuestra tasa de impunidad rebasa el 90 por ciento de los delitos denunciados.

... Estudios ya repetidos varias veces por el CIDE sobre población penitenciaria en el Distrito Federal y en el Estado de México confirman una y otra vez que la mayor parte de la población que está interna en los centros de privación de libertad es gente que ha cometido delitos patrimoniales de menor cuantía y de estrato socioeconómico bajo. Es decir, tenemos una alta tasa de impunidad y los pocos delitos que se condenan tienen que ver en su mayoría con hechos patrimoniales menores.

... los delitos de alto impacto no tienen en general condena. Recientemente se han dado a conocer algunos datos muy contundentes: uno que publicó Associated Press nos dice que, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en 2009 hubo 2 mil 600 muertos y el Ministerio Público abrió 93 expedientes de homicidio de los cuales consignó a 19 personas. De esas 19 personas, 5 fueron acusadas por homicidio en primer grado.

El sistema penitenciario es solamente una parte del problema. Pero es, en muchos sentidos, la expresión más dramática de la incapacidad del Estado para hacer valer el Estado de derecho. Porque si bien es difícil pedirle al Estado que nos dé seguridad a todos en la calle, lo que es absolutamente obligado para el Estado es garantizar la seguridad y la vigencia de la ley dentro de las prisiones.

Las prisiones están gobernadas por grupos criminales en mayor o menor medida; las prisiones tienen dinámicas propias de vida, reglas propias en donde el Estado tiene un papel marginal. Por eso

no se puede controlar el flujo de mercados ilegales, por eso se dan fenómenos de prostitución, consumo de drogas. Pero lo más grave de todo no solamente es que el Estado no pueda controlar las prisiones, sino que las prisiones están profesionalizando a los criminales.

Los teóricos le llaman a este estado la etapa predatoria. Es una etapa en la que los intereses criminales van depredando a las instituciones. Esto quiere decir, las van ocupando, las van sometiendo a través de la influencia ejercida por el poder: el poder económico, el poder de la violencia, el poder de las armas.

> ¿Qué puede hacer la sociedad para atacar esta crisis?

Hay que entender un principio básico y creo que esto tendría que ser una comprensión de todos los ciudadanos. Hay que entenderlo así: si la sociedad no participa, si la sociedad no se organiza, no van a cambiar las cosas. Tengo 20 años estudiando estos temas en el mundo. No conozco ni una sola reforma exitosa en la que no haya participado la sociedad, ni una. O prometedora, si no exitosa, que tenga una promesa de poder ser exitosa.

Sudáfrica, Irlanda del Norte, Turquía, Colombia, El Salvador, Europa Central, Canadá, a donde uno vaya, los proyectos modernos y democráticos de seguridad y justicia incorporan la participación ciudadana. Entonces, ¿qué puede hacer la gente? Hay distintos tipos de estrategias para la gente.

Nosotros hemos clasificado a la sociedad civil en distintos sectores: la sociedad civil en general; la sociedad civil organizada; y la sociedad civil organizada e informada, que es por ejemplo, este instituto, en donde lo que se hace es recopilar información permanentemente, interpretarla, analizarla e ir con el Estado y hacerle una propuesta de cambio, una propuesta de reforma.

Estamos lejos de las prácticas internacionalmente reconocidas, al punto tal que el funcionario

promedio en las áreas de seguridad pública en México no conoce las reglas, las recomendaciones de la ONU para la prevención del delito.

Hay una operación fundamental que se tiene que hacer, que es quitar de las manos de la policía el control de las acciones de seguridad pública y dárselas a estos cuadros civiles y expertos que serán capaces de crear políticas públicas integrales de seguridad que incluyen a la policía. Tenemos que, por raro que parezca el nombre, despolicializar el control de la seguridad pública.

Eso están haciendo en otros países: se crean ministerios de seguridad pública y los conducen expertos civiles, no policías. A los policías hay que pedirles que hagan el extraordinario trabajo que pueden hacer pero en el marco de una política pública de seguridad. Esa política pública de seguridad despresurizaría, entre otras cosas, las prisiones. Todo el sistema se despresuriza porque se crean mecanismos alternativos de resolución de conflictos. No solamente penales, como los está proponiendo la reforma penal; no, previos al problema penal.⁶

Algunas cifras de la violencia.

Las cifras de asesinatos provocados por la violencia en México han tenido un escalamiento tan dramático que si comparamos no únicamente los promedios nacionales sino los de las jurisdicciones subnacionales, con más de un millón de habitantes, en América Latina, quedamos estupefactos: De las diez entidades con las tasas más altas, dos son mexicanas: el Estado de Chihuahua con 112, y el Estado de Durango con 59 homicidios por cada cien mil habitantes.⁷

Si nos referimos al problema ya no sólo a nivel subnacional, sino al de las ciudades más afectadas por la violencia ---considerando únicamente aquéllas que tienen más de medio millón de habitantes---, México incluye tres de las diez peores en el Subcontinente Americano: Culiacán con 75, Chihuahua con 80 y Ciudad Juárez con 210 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. Sin ninguna duda, ésta última ciudad tiene la tasa más alta en toda Latinoamérica.

De esas alarmantes cifras las que son imputables a la delincuencia organizada han venido incrementando su importancia: en el 2007, eran el 24% del total; en el 2008, el 42%; en el 2009, llegaron a 52%; y en el 2010, según las proyecciones, podrían llegar al 67% del total.

Además, un hecho sumamente ominoso es que las víctimas que han sido asesinadas sin que tengan antecedentes de relación con el hampa, ascienden al diez por ciento del total.

La mayoría de los muertos no lo ha sido en enfrentamientos, cayendo en combate, sino que han sido secuestrados, torturados y asesinados, frecuentemente con una saña inaudita.

*La sociedad no sabe cómo asimilar estos lamentables episodios. No entiende si se trata de una guerra --- como había sido calificada al principio de este sexenio por el Presidente **Calderón**--- o si es simplemente una lucha como ahora prefiere designarla. Pero los ataques a las fuerzas públicas con granadas de fragmentación ---que constituyen un cierto indicio de terrorismo--- han venido creciendo: fueron 21, en 2007; ascendieron a 39, en el 2008; y han llegado hasta 116, en 2009.*

Dentro de este fenómeno de la delincuencia considerada en su conjunto, algunos de los eventos que lastiman con mayor crueldad a la sociedad son los secuestros, muchos de los cuales son agravados con el

maltrato, la mutilación e incluso el asesinato de las víctimas.

Los secuestros se mantuvieron entre ochocientos y quinientos cincuenta anuales, desde el 97 hasta el 2007, antes eran mucho menos. Pero en 2008 fueron 1,187, y en 2009 alcanzaron la cifra de 1514.

Bien se entiende el tremendo dolor que los secuestros han causado en la sociedad por las familias que han sido gravemente afectadas en sus padres, hijos, parientes y amigos cercanos.

Cada secuestrado, mucho más allá de ser un agregado en las cifras es una dolorosa tragedia para la sociedad, sobre todo cuando se trata de víctimas ajenas a las mafias.

El Presidente dijo en una reunión con la bancada panista. (17/08/2010)

El Presidente **Felipe Calderón** pidió al PAN en la Cámara de Diputados impulsar en el próximo periodo de sesiones, que arranca el 1 de septiembre, la cadena perpetua para secuestradores que mutilen o asesinen a sus víctimas.

Dicha iniciativa presidencial fue descartada de la Ley Antisecuestro aprobada en abril en el Senado, la cual aún deberá discutirse en San Lázaro.

“Ésta no es la lucha de **Felipe Calderón**. No es sólo mi tema. Cualquiera que haya rendido juramento constitucional es su tema. En cualquier estado de donde ustedes provienen no permitan que se diga que la responsabilidad no es de las autoridades locales. Es también de ellas”.

“Yo jamás he eludido mi responsabilidad. Es hora de plantearle seriamente a la nación que cada quien asuma su responsabilidad en su ámbito de competencia, y que nadie más se lave las manos con un problema tan grande como es el de la inseguridad”, enfatizó.

Durante 58 minutos, el Presidente argumentó que el narcotráfico dejó de operar sólo en las fronteras y ahora intenta controlar cada pueblo del País porque, sostuvo, no encontró resistencia de las autoridades locales y porque existen Gobiernos cooptados e intimidados.

“Este cambio sustancial no fue observado con detenimiento. Al pasar a dominar territorios, los criminales, para poder controlar sus tienditas, empezaron a acosar a la autoridad, a través de la cooptación, la mordida, la corrupción, o a través de la intimidación, la amenaza. Hoy mismo, hay Alcaldes, por ejemplo, que fueron secuestrados por criminales”, indicó, en referencia al plagio del Edil de Santiago, Nuevo León, **Edelmiro Cavazos**.⁸

Cinco ejes de la estrategia del Presidente Calderón. (17/08/2010)

En un artículo publicado en el diario francés Le Monde, que envió (el Presidente **Calderón**) en respuesta a un material que difundió el rotativo galo la semana pasada, en el que se criticó la política anticrimen desarrollada en la actual administración, enumeró los cinco pilares que integran su estrategia y que han permitido que estemos debilitando las estructuras logísticas y financieras de la delincuencia.

El mandatario insistió: Mi gobierno ha decidido hacer frente al problema y no eludirlo. A continuación esbozó los cinco ejes de su estrategia:

- 1.- Operaciones conjuntas de apoyo a las autoridades locales y los ciudadanos;
- 2.- Extensión de las capacidades operativas y tecnológicas de las fuerzas del Estado;

3.- Reforma al marco jurídico e institucional;

4.- Una política de prevención del delito, y

5.- Reforzamiento de la cooperación internacional.⁹

El secuestro es un azote crudelísimo para la sociedad. (17/08/2010)

En esos dos años se tienen reportados 2 mil 112 secuestros en el País.

Sin embargo, para **Eduardo Gallo**, presidente de la organización México Unido Contra la Delincuencia, la cantidad de plagios denunciados contra los realmente ejecutados se queda corta, ya que ronda entre los 7 mil 500 y los 10 mil al año.

Tan solo de enero a junio de este año se han denunciado más de 674 secuestros, un 15.6 por ciento más de los 583 registrados en el mismo periodo de 2009.

Desde la firma del Acuerdo, el secuestro ha reportado un incremento de denuncias en Coahuila, Morelos, Tabasco, y Puebla. En cambio, las entidades que registran menor incidencia son Campeche, Tlaxcala, Baja California Sur, Querétaro y Nayarit, mientras que Yucatán no ha tenido ningún caso de este delito en tres años.

Gallo, quien hace 10 años ubicó y detuvo a los secuestradores y asesinos de su hija, advirtió que las Procuradurías estatales inhiben la denuncia de plagios y sólo toman el reporte del denunciante, sin que ello implique iniciar una averiguación previa.

En entrevista aseguró que en materia de secuestro y en general de seguridad, el Acuerdo resultó ser letra muerta porque los gobernadores no tuvieron interés en concretar el proyecto pactado.¹⁰

El PRI se asocia con el PRD para desdeñar la convocatoria presidencial. (20/08/2010)

El gobernador del Estado de México, **Enrique Peña Nieto**, dio su completo apoyo al desaire hecho por los legisladores del PRI al presidente **Felipe Calderón**.

Ninguno de los coordinadores parlamentarios de ese partido acudió a la cita, en Los Pinos, para continuar con los Diálogos por la Seguridad convocados por el Poder Ejecutivo.

El mandatario estatal afirmó que no se trata de una posición personal, sino de cerrar filas con su partido y dejó entrever que no asistirá a ninguna nueva cita sobre el tema, mientras no exista una agenda clara.

La tarde del pasado miércoles, el presidente **Felipe Calderón** envió una invitación a los coordinadores de las bancadas del Senado y la Cámara de Diputados para que asistieran a una nueva jornada de los Diálogos por la Seguridad.

No se hicieron esperar las negativas priístas, así como de algunos sectores de PRD y PT, en voz de **Manlio Fabio Beltrones, Francisco Rojas, Alejandro Encinas y Ricardo Monreal**.

A este respecto, en Querétaro, el líder priísta en el Senado dijo que si el Presidente **Calderón** quiere diálogo, debe ir al Congreso de la Unión, pues bajo ninguna circunstancia algún acercamiento debe circunscribirse a sólo una reunión con los coordinadores parlamentarios.

El legislador dijo que si el jefe del Ejecutivo desea platicar tiene una buena oportunidad el próximo 1 de septiembre, con un diálogo abierto en el que haya preguntas y respuestas, y en el que deberá explicar su baja eficiencia en materia de seguridad y economía.¹¹

Las secuelas de la creciente violencia que padecemos son muchas y complejas

Las repercusiones políticas en el país, de la violencia generada por la delincuencia organizada, son muchas e importantes y por ende dignas de tomarse en cuenta.

*Como lo hace notar el especialista en estos temas, **José Antonio Ortega** en el libro de su autoría que está por salir a las librerías, México: ¿Rumbo al Estado fallido?¹², tanta violencia como estamos sufriendola en México puede afectar severamente la gobernabilidad del país, aún sin meternos a discutir, como él lo hace, si estamos ya en una condición de Estado fallido o si nos encaminamos hacia allá.*

*Con motivo de la celebración del “Diálogo por la Seguridad” convocado por el Presidente **Calderón** se ha hecho más evidente el enorme problema que se deriva de un divorcio sumamente conflictivo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.*

Una de las lacras más notables del antiguo régimen ---de la “familia revolucionaria---” fue la enorme corrupción apuntalada con la impunidad de los responsables de su instrumentación y usufructo. Y sin duda siguen siendo estas lacras la causa de la debilidad creciente del Estado mexicano y de su peligrosa derivación hacia una sociedad con ingobernabilidad creciente en algunas regiones del país, estratégicas para el trasiego y transporte de las drogas hacia el mercado del Norte, como es el caso de las zonas fronterizas de Chihuahua, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas, y de regiones serranas como Durango y Sinaloa, y de zonas clave por sus puertos y vías de comunicación como Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

En otra vertiente, varios de los expertos coinciden en señalar el tema neurálgico de la pérdida de control de los penales en general, pero especialmente de aquellos en los que se encuentran delincuentes acusados de delitos del orden federal, principalmente de narcotráfico.

Para el ciudadano común resulta una incógnita sin respuesta ¿por qué este Gobierno Federal, que se ha enfrascado en esta guerra que había sido ignorada o irresponsablemente evitada por regímenes anteriores no se ha hecho cargo, en un primero y destacado cometido, de un control estricto de los penales?

Es evidente la grave corrupción que reina en todos estos establecimientos ---creados teóricamente para sancionar y regenerar a los reos--- en los cuales la realidad lacerante es que la autoridad legal está prácticamente de adorno y que son los propios delincuentes quienes han impuesto una especie de autogobierno perverso, convirtiendo a las cárceles en sus cuarteles, con la ventaja de que son prácticamente inexpugnables ---para sus rivales y para las propias autoridades--- desde donde continúan sus operaciones delictivas, eliminan a sus competidores tanto dentro como fuera de los penales, mantienen a los guardias y policías a su servicio mediante su sometimiento por la fuerza, o su cooptación a través de jugosas dádivas y las han convertido en verdaderos centros de entrenamiento y capacitación de los sicarios a su servicio que salen de ellas postgraduados.

Tal como lo han confesado las propias autoridades en una especie de rendición vergonzosa e infamante ni siquiera han podido evitar que se comuniquen los reos con teléfonos celulares, que teóricamente están prohibidos, mediante los cuales coordinan sus planes, extorsionan a sus víctimas, dirigen secuestros y coordinan toda clase de tropelías.

*La falta de control de las prisiones que no ha podido restablecerse ---y ni siquiera mejorarse de manera relevante--- en estos cuatro años de guerra abierta contra el narcotráfico configura una falla estratégica inexcusable, de la cual alguien en el gobierno además del Presidente **Calderón** debiera sacar la cara como responsable.*

El Acuerdo Nacional por la Seguridad no ha funcionado. (22/08/2010)

Tres Secretarios de Gobernación, dos Procuradores, cuatro secretarios ejecutivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuatro secretarios técnicos del Consejo Nacional de Seguridad y tres jefes de la Policía Federal: ese desfile de funcionarios en áreas estratégicas de la seguridad nacional dificultó el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, según varias organizaciones ciudadanas.

Pero eso no es todo. Los titulares de otras tres secretarías claves para la instrumentación de las medidas que le correspondían al Poder Ejecutivo federal en el pacto, firmado el 21 de agosto de 2008, fueron sustituidos durante los dos primeros años de vigencia del Acuerdo: Hacienda, Comunicaciones y Transportes y Desarrollo Social.

De los funcionarios firmantes, sólo se mantienen en su cargo los titulares de las secretarías de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina y Función Pública.

Los dos dirigentes ciudadanos que firmaron el Acuerdo, **María Elena Morera** y **Alejandro Martí**, consideran que uno de los principales obstáculos para el cumplimiento del Acuerdo fue la falta de continuidad y la ausencia de coordinación entre Poderes y niveles de Gobierno, generadas por estos relevos.

"No hay funcionarios de Estado que den continuidad y cumplan las obligaciones y compromisos institucionales (...) Estamos a expensas de caprichos, visiones personales y partidistas, que impiden dar continuidad a obligaciones públicas", acusó **Morera**.

"Los breves plazos en que los funcionarios se mantienen en responsabilidades determinadas, ya sea por ser ineficientes o por el incansable brincar de un puesto a otro por ambiciones políticas y por los breves plazos de ciertos puestos de elección popular, impiden, en la mayoría de los casos, completar programas", advirtió **Martí**.¹³

El narcotráfico podría escalar sus ataques a la clase política. (23/08/2010)

El gobernador electo de Sinaloa, **Mario López Valdez**, Malova, advirtió que existe el riesgo de que un gobernador pueda ser asesinado por el crimen organizado, debido a la escalada de violencia e inseguridad que afecta al país.

"En este país ya mataron a un candidato que iba a ser presidente (**Luis Donald Colosio**, en marzo de 1994), mataron a uno que iba a ser gobernador (**Rodolfo Torre Cantú**, en Tamaulipas, en junio pasado), han matado a varios legisladores y recientemente al alcalde de Santiago, Nuevo León (**Edelmiro Cavazos Leal**).

"No tardan para que puedan matar un gobernador. Como van las cosas nadie puede descartarlo, yo quisiera decirlo para que no ocurra, para que estemos alertas", sostuvo el sinaloense.

López Valdez consideró que, además de ser una de las demandas más urgentes de la ciudadanía, el tema de la seguridad se ha convertido en los tiempos actuales en una necesidad para mantener la gobernabilidad.

Por ello, sostuvo que es indispensable mantener la paz y el orden en el país y, en caso de ser necesario, solicitar la cooperación de las autoridades federales para garantizarlas.

Aseguró que en México hay alrededor de 600 mil delincuentes y señaló: “No es posible que (estos grupos) puedan más que 106 millones de ciudadanos que buscamos tranquilidad para el país”.¹⁴

Los bajos salarios de las policías son un flanco débil ante el acecho de la corrupción.

(23/08/2010)

En los estados de mayor violencia derivada del narcotráfico, la vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad ante las bandas criminales es extensa:

1) En Chihuahua, donde se concentra la mayor parte de las muertes en los tres últimos años, el déficit salarial de un policía era de casi 30 por ciento, lo que significa que estaban a dos mil 360 pesos de ganar el mínimo necesario para un nivel de subsistencia. Por ese estado atraviesa el 70 por ciento de la cocaína hacia Estados Unidos, la droga que da los enormes márgenes de utilidad a los cárteles. Frente a ello, salarios de ocho mil pesos al mes son realmente ridículos. Sólo como

ejemplo, al sicario que colocó el coche bomba recién en Ciudad Juárez, le pagaron siete mil pesos por hacerlo.

2) En Durango, el déficit salarial es menor de 7 por ciento, pero con sueldos mensuales que no llegan a los seis mil 500 pesos, el costo de corromper a la fuerza policial municipal, si sólo se les pagara el diferencial en el déficit salarial, le costaría al narcotráfico menos de 20 mil pesos mensuales.

3) En Nuevo León, que es uno de los estados donde más altos salarios tienen los policías, se ubicaban en 11 mil pesos, lo que les genera un déficit de 37 por ciento frente al poder de compra estatal. Con menos de cuatro mil pesos suficientes para completar el gasto mínimo necesario de un policía bastaría para un cártel para tener a su servicio a un agente. Se han dado casos de que ni siquiera necesitan invertir esa cantidad; por mil 500 pesos tuvieron a un operador de planta de radio que cada vez que querían transportar la droga por Monterrey, él enviaba a las patrullas lejos de la ruta de los narcotraficantes.¹⁵

Al parecer, el país ya no puede contar con el PRI, cuyos líderes están obsesionados en volver a la Presidencia.

*El Presidente **Calderón**, por su parte, sigue insistiendo en la necesidad de reformar algunas leyes. Por ejemplo para que los secuestradores que mutilen o asesinen pudieran ser condenados a cadena perpetua. Pero, a diferencia del control de los penales, que podría instrumentar sin necesidad de reforma legal alguna y que podría incidir fuertemente en el debilitamiento de las mafias a las que ha declarado la guerra, esas otras medidas necesitarían obviamente de la cooperación del Poder Legislativo, mismo que se ve cada día más difícil.*

De hecho, los líderes del PRI han logrado organizar un frente común para confrontarse con el gobierno panista, especialmente con el Presidente. Esto ha sido evidente por el creciente nivel de las críticas sin concesiones de ninguna clase, y por el desprecio a los planes y programas del Presidente, acciones presuntamente articuladas como una represalia por las alianzas celebradas entre el PAN y el PRD en las pasadas elecciones, en las cuales el PRI perdió tres estados que había controlado por más de ochenta años ---Oaxaca, Puebla y Sinaloa--- aun cuando se le malograron de una manera bastante curiosa porque los candidatos ganadores en las tres entidades con la patente de otros partidos ---el PAN y el PRD--- fueron formados y desarrollados políticamente como parte de la “familia revolucionaria” dentro del propio PRI.

Evidentemente los líderes “priístas” quisieran conjurar la posibilidad de que la alianza coyuntural del PRD y el PAN, en las elecciones, pudiera alargarse en el Poder Legislativo ---posibilidad por otro lado bien remota, por la veleidosa e inconsecuente actitud del Partido de la Revolución Democrática--- amenaza que atendiendo a su reacción forma parte de sus preocupaciones, y por ello mismo de las acciones que han emprendido para evitarla.

En consonancia con esos acuerdos internos de unidad en el PRI, sus coordinadores ---**Manlio Fabio Beltrones** y **Francisco Rojas**--- estuvieron ausentes en la reunión a la cual fueron convocados en el marco del Diálogo por la Seguridad. Y además, convencieron a los susceptibles coordinadores del partido aliado del PAN, el PRD ---**Alejandro Encinas** y **Ricardo Monreal**--- para que tampoco acudieran.

No resulta muy fácil concluir que lo mejor para el PRD era hacer causa común en este caso, con el PRI, para desdeñar al Presidente de la República, perteneciente al partido con el cual se aliaron para derrotar al PRI, siendo el programa bandera de **Felipe Calderón** precisamente la guerra contra el narcotráfico campaña en la cual, en teoría, deberían estar apoyándolo no sólo sus presuntos aliados sino todos los sectores políticos y sociales del país. Evidentemente, esto que “debería ocurrir” no es parte de nuestra realidad.

Parte de la percepción negativa hacia el Presidente **Calderón** ---y su plausible y meritoria, por muchas razones, campaña contra la delincuencia organizada---, se debe a que los planes y programas convenidos por él y propalados por su gobierno no se han transformado en realidades tangibles y medibles, por fallas cuya responsabilidad no puede ser evitada por el Ejecutivo: El Acuerdo Nacional por la Seguridad lejos de formar parte de los méritos del Presidente se ha convertido en la evidencia de sus inocultables deficiencias ---de él y de sus principales colaboradores encargados de estas importantes responsabilidades---.

Las críticas enderezadas al Ejecutivo no han sido únicamente por parte de los políticos. Las de las organizaciones sociales, de los expertos y de la opinión pública en general han sido sumamente severas y han aportado material abundante a la Oposición.

Muchos, incluso expertos ---muy avezados y experimentados--- como **Joaquín Villalobos**, afirman que esta guerra de los narcotraficantes no tiene fines políticos. Que se trata de bandas de narcotraficantes a los cuales lo único que les interesa es realizar su negocio con las menores perturbaciones posibles.¹⁶

Sin embargo, hay una contradicción que no se explica. En esa teoría la violencia se daría, si no exclusivamente cuando menos principalmente, entre las bandas, peleando por el control de los territorios, de las rutas y del control de la proveeduría al mercado realmente importante que es, sin duda, el de los Estados Unidos. Pero con esa hipótesis sola no se explica el “calentamiento”, aparentemente innecesario, de las plazas mediante el asesinato de políticos y funcionarios en activo, como fueron los casos del candidato al gobierno de Tamaulipas, **Rodolfo Torre Cantú** o del presidente municipal de Santiago, Nuevo León, **Edelmiro Cavazos**.

Claves del documento

Preámbulo.

Opiniones.

- *Opiniones*
- Hechos
- **Actores**

Fe de erratas.

Notas al final del documento

¹ National Public Radio, NPR, CNN, México, 18 de mayo del 2010.

² Francisco Rojas, El Universal, 10 de agosto del 2010.

³ La Guerra de México, Joaquín Villalobos. Ex miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Consultor para la resolución de conflictos internacionales, Revista Nexos, 11 de agosto del 2010.(extractos)

⁴ Ignacio Alzaga, Milenio Diario, 14 de agosto del 2010.

⁵ Entrevista a John Mill Ackerman, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por Irma Ortiz, Revista Siempre, 15 de agosto del 2010. (extractos)

⁶ Entrevista a Ernesto López Portillo, Director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, por Elena Vega, Revista Siempre, 15 de agosto del 2010. (extractos)

⁷ Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C., agosto de 2010.

⁸ Érika Hernández, Reforma, 17 de agosto del 2010.

⁹ Redacción, La Jornada, 17 de agosto del 2010.

¹⁰ Luis Brito y Antonio Baranda, Reforma, 20 de agosto del 2010.

¹¹ Horacio López y Estrella Álvarez, Milenio Diario, 20 de agosto del 2010.

¹² México: ¿Rumbo al Estado fallido?, José Antonio Ortega Sánchez, Editorial Planeta, por aparecer en fecha próxima.

¹³ Octavio Ortega, Reforma, 22 de agosto del 2010.

¹⁴ Miriam Castillo, Milenio Diario, 23 de agosto del 2010.

¹⁵ Raymundo Riva Palacio, “Durmiendo con el enemigo”, El Financiero, 23 de agosto del 2010.

¹⁶ La Guerra de México, Joaquín Villalobos. Ex miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Consultor para la resolución de conflictos internacionales, Revista Nexos, 11 de agosto del 2010.